Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a **dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro**.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **01415/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,en lo sucesivo **el Recurrente**, en contra de la respuesta del **Secretaría del Trabajo**,en lo subsecuenteel **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO. De la solicitud de información.**

En fecha **veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro**, **el** **Recurrente**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número de expediente **00068/ST/IP/2024**, mediante la cual solicitó lo siguiente:

*“Solicito el listado de empresas sancionadas y las sanciones que hayan sido determinadas producto de una inspección laboral de 2019 a 2024” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** A través del **SAIMEX**.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias del expediente electrónico **SAIMEX,** se advierte que en fecha **trece de marzo de dos mil veinticuatro,** el Sujeto Obligado emitió su respuesta en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Con base en el Reglamento Interior y el Manual General de Organización ambos de la Secretaría del Trabajo, correspondió a la Subdirección de Inspección del Trabajo de la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral de esta Dependencia atender su solicitud; por lo que, adjunto en archivo PDF copia del oficio de respuesta e información proporcionada por el Servidor Público habilitado de la unidad administrativa antes mencionada.*

*ATENTAMENTE*

*L. en D. Ángeles María del Carmen Sánchez Santana” (Sic).*

El **Sujeto Obligado** adjuntó a su respuesta, el archivo electrónico denominado *“Resp.00068yOficSPH.pdf”;* cuyo contenido no se inserta por ser del conocimiento de las partes; sin embargo, será motivo de estudio en el Considerado respectivo.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta por parte del **Sujeto Obligado**, la **Recurrente** interpuso el presente recurso de revisión en fecha **trece de marzo de dos mil veinticuatro**, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número **01415/INFOEM/IP/RR/2024**, en el cual aduce, las siguientes manifestaciones:

1. **Acto Impugnado:**

*“La respuesta a la solicitud de información 00068/ST/IP/2024” (Sic).*

1. **Razones o Motivos de Inconformidad**:

*“Solicite el listado de empresas sancionadas dado que son sujetos que han sido sometidos a un procedimiento administrativo y ha sido comprobado su incumplimiento en las condiciones legales estipuladas en la ley, por tal motivo no puede existir una responsabilidad de la dependencia de proteger sus datos, por esta razón solicito que el caso sea analizado por el Instituto de Transparencia.” (Sic)*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico, en términos del arábigo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de admisión en fecha **veinte de marzo de dos mil veinticuatro**, determinándose en él, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de manifestaciones y/o alegatos.**

Una vez transcurrido el término legal referido **el Sujeto Obligado** rindió su informe justificado el **veintidós de marzo de dos mil veinticuatro**, a través de los archivos electrónicos denominados “RespSPH.RR.01415-00068.pdf” y “IJ.RR.01415-00068.pdf”, los cuales fueron puestos a la vista del Recurrente el **primero de abril de dos mil veinticuatro**. Asimismo, se advierte que **el Recurrente**, no realizó alegatos, ni remitió pruebas o manifestaciones.

**SEXTO. Del cierre de instrucción.**

Una vez transcurrido el término legal, se decretó el cierre de instrucción en fecha **cinco de abril del año en dos mil veinticuatro**, en términos del artículo 185, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**SÉPTIMO. De la ampliación del término para resolver.**

De las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que han transcurrido los términos de Ley, para la emisión de la resolución en el presente recurso de revisión, por lo que en fecha **trece de mayo del año dos mil veinticuatro**, se notificó a las partes el acuerdo por el que se ordena ampliar el plazo para la emisión de la resolución, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, que se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De los alcances del Recurso de Revisión.**

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. De las causas de improcedencia.**

En el procedimiento de acceso a la información y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad, los cuales deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

De lo anterior, el estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto, ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión, se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

Así las cosas, en la especie, no se actualiza ninguna causa de improcedencia de las referidas en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, encontrándose actualizados todos los supuestos procesales para atender el fondo del asunto, en los términos del considerando posterior.

**CUARTO. Estudio y resolución del asunto.**

En primer término es necesario hacer alusión a la solicitud de información ya que de ella deriva por un lado al procedimiento de acceso a la información ante el sujeto obligado, y por otro lado la materia sobre la que versara el recurso de revisión ante este Órgano Garante; se resalta la innegable necesidad de interpretar el texto de las solicitudes, porque no se podría entender el derecho de acceso a la información sin la existencia de solicitudes de información a la luz de su interpretación ya que ésta es la fuente de la materia objeto de la transparencia específica en cada recurso de revisión; es decir, no podemos establecer una materia o un tema como objeto de derecho de acceso a la información, si de la solicitud no se entiende o no se precisan temas o materias objetivas; por ello es de notoria importancia el trabajo de interpretación que se le dé a las solicitudes de información, ya que el sujeto obligado puede considerar una circunstancia en particular diversa a la que el particular objetivamente requiere.

Ya que el planteamiento del problema es de toral importancia, a efecto de determinar la intención o voluntad del Recurrente a la luz de la interpretación de las solicitudes de información, y que puede generar de forma objetiva y material el sujeto obligado que se relacione con esa intención, respecto del presente asunto se realiza a continuación.

Ahora bien, se procede al análisis del presente recurso, así como el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Federal y el diverso 8, de la Ley de Transparencia local.

Con el propósito de resolver el presente medio de impugnación, es conveniente recordar que el Recurrente solicitó al Sujeto Obligado lo siguiente:

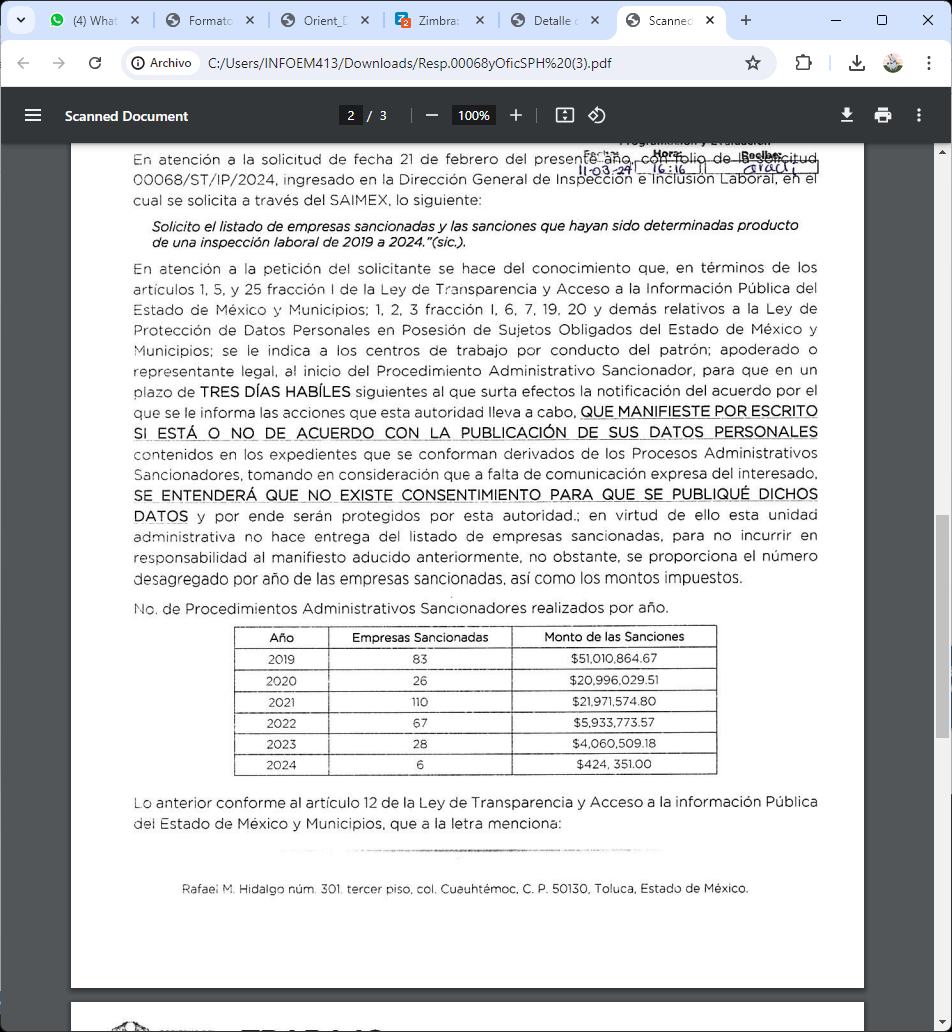
Del producto de una inspección laboral de 2019 a 2024, lo siguiente:

1. Listado de empresas sancionadas; y
2. Las sanciones que hayan sido determinadas.

En atención a los requerimientos de información planteados por el particular, el Sujeto Obligado, adjuntó a su respuesta el archivo electrónico denominado *“Resp.00068yOficSPH.pdf”;* el cual consta en lo siguiente:

* Resp.00068yOficSPH.pdf: La Titular de la Unidad de Transparencia, a través del número de oficio, de fecha doce de marzo de dos mil veinticuatro, señaló adjuntar el oficio de respuesta emitida por la Subdirección de Inspección del Trabajo de la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral de esa Dependencia, que de acuerdo a su competencia establecida en el Reglamento Interior y el Manual General de Organización de la Secretaría del Trabajo corresponde dar atención a la solicitud de información.

El **Subdirector de Inspección del Trabajo**, a través del número de oficio 20900009000100L/0983/2024, de fecha ocho de marzo de dos mil veinticuatro, informó, que se indica a los centros de trabajo por conducto del patrón, apoderado o representante legal, al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, para que **en un plazo de tres días hábiles siguientes**, al que surta efectos la notificación del acuerdo en el que se les informa las acciones que esa autoridad lleva a cabo, **para que manifiesten por escrito si está o no de acuerdo con la publicación de sus datos personales**, contenidos en los expedientes que se conforman derivados de los Procesos Administrativos Sancionadores, tomando en consideración de que **a falta de comunicación expresa del interesado, se entenderá que no existe consentimiento para que se publique dichos datos** y por ende serán protegidos por esa autoridad. Atento a ello no se hace entrega del listado de las empresas sancionadas, para no incurrir en responsabilidad. Proporcionó el número desagregado por año de las empresas sancionadas, así como los montos impuestos, tal como se observa en la siguiente imagen:

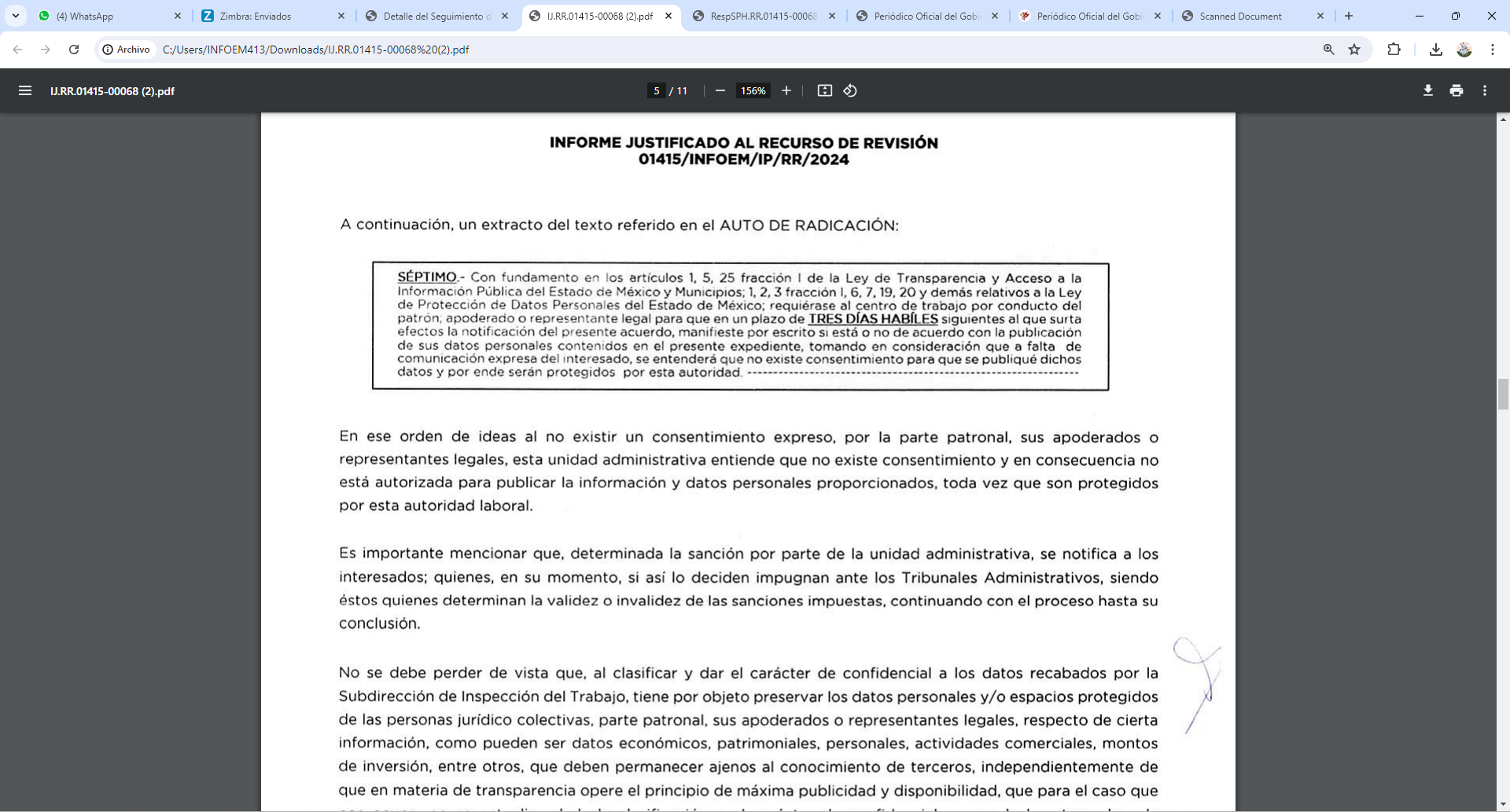


Derivado de la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado**, **el Recurrente**, interpuso el presente recurso de revisión, señalando como razones o motivos de inconformidad, lo siguiente:

*“Solicite el* ***listado de empresas sancionadas*** *dado que son sujetos que han sido sometidos a un procedimiento administrativo y ha sido comprobado su incumplimiento en las condiciones legales estipuladas en la ley, por tal motivo no puede existir una responsabilidad de la dependencia de proteger sus datos, por esta razón solicito que el caso sea analizado por el Instituto de Transparencia.” (Sic).*

Posteriormente el Sujeto Obligado remitió su informe justificado a través de los archivos electrónicos denominados “RespSPH.RR.01415-00068.pdf” y “IJ.RR.01415-00068.pdf”, por medio del cual el Titular de la Unidad de Transparencia rinde su informe justificado de acuerdo a las constancias que integran el expediente electrónico del SAIMEX, asimismo informó que a través del oficio número 20900009000100L/1220/2024 de fecha veinte de marzo de dos mil veinticuatro el Subdirector de Inspección del Trabajo de la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral de esa Dependencia ratifica respuesta inicial.

Asimismo insertó captura de pantalla, de un extracto del texto referido en el Auto de Radicación, el cual se advierte a continuación:



Por lo que al no existir un consentimiento expreso, por la parte patronal, sus apoderados o representantes legales, esa unidad administrativa entiende que no existe consentimiento y en consecuencia no está autorizada para publicar la información y datos personales, ya que son protegidos por esa autoridad. En cuanto a la sanción por parte de la unidad administrativa se notifica a los interesados, los cuales deciden impugnar ante los Tribunales Administrativos, quienes determinan la validez o invalidez de las sanciones impuestas, continuando con el proceso hasta su culminación.

Bajo las premisas anteriores, se concluye que en la especie será motivo de análisis si efectivamente, la respuesta otorgada por parte del **Sujeto Obligado** satisface los requisitos establecidos por la Ley de la materia.

Señalado lo anterior, es de precisar que se obvia el análisis de la competencia por parte del Sujeto Obligado, para generar, administrar o poseer la información solicitada, dado que éste ha asumido la misma, mediante los documentos remitidos en respuesta a la solicitud de información.

En efecto, el hecho de que el Sujeto Obligado haya asumido la información implica que la genera, posee o administra, en ejercicio de sus funciones de derecho público, es decir, no niega la existencia de la información solicitada, por el contrario, se pronuncia respecto de la información requerida, es por ello por lo que se reitera, se asume que posee la información; por lo tanto, el estudio en específico se obvia dado que a nada práctico llevaría el alcance del mismo.

En ese sentido, es de advertirse lo siguiente, nuestra Carta Magna dispone que para el ejercicio del derecho de acceso a la información los Estados deben observar diversos principios y bases, entre los cuales se establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, órgano, organismo, órganos autónomos, así como de cualquier sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, ello se aprecia en el Artículo 6, apartado A, numeral I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece:

*“****Artículo 6***

*…*

*Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 3, fracción XI y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales son del tenor literal siguiente:

***“Artículo 3.-*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI.******Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona,*** *en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones****.”*

[Énfasis añadido]

De la interpretación a los preceptos citados, se desprende que es información pública la contenida en los documentos que los Sujetos Obligados generen, administren o se encuentre en su posesión en el ejercicio de sus atribuciones y que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona.

Por otro lado, no debe soslayarse el hecho de que **el Recurrente** no impugnó el total del contenido de la respuesta dada por el Sujeto Obligado, ello en virtud de que señaló expresamente la negativa de proporcionar la información relacionada con el listado de empresas sancionadas, al manifestar textualmente lo siguiente: *“****Solicite el listado de empresas sancionadas*** *dado que son sujetos que han sido sometidos a un procedimiento administrativo y ha sido comprobado su incumplimiento en las condiciones legales estipuladas en la ley, por tal motivo no puede existir una responsabilidad de la dependencia de proteger sus datos, por esta razón solicito que el caso sea analizado por el Instituto de Transparencia.” (sic)*

En este tenor, se estima que **el Recurrente** está conforme con los documentos que le fueron entregados referentes al documento en donde consten **las sanciones que hayan sido determinadas producto de una inspección laboral de 2019 a 2024**; por lo que el motivo de su inconformidad radica en que no se entregó la información relacionada al **listado de las empresas sancionadas**, por lo que puede colegirse que la respuesta fue parcialmente consentida.

Lo anterior es así debido a que cuando el solicitante no expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros de la respuesta que pudieran ser un agravio a su derecho, los mismos deben estimarse atendidos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES****. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.*

Así, la parte de la solicitud sobre la que no se expresó inconformidad, debe declararse consentida por el hoy Recurrente, ya que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar la parte de la respuesta con relación a la parte de la solicitud que no fue motivo de disenso ya que se infiere un consentimiento del Recurrente ante la falta de impugnación eficaz. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.*

Así, una vez establecido que el motivo de inconformidad del Recurrente es la negativa de proporcionar la información faltante antes referida, se infiere que la *litis* radica en establecer si el Sujeto Obligado entregó los documentos en donde conste, lo siguiente:

Del producto de una inspección laboral de 2019 a 2024, lo siguiente:

1. Listado de empresas sancionadas; y

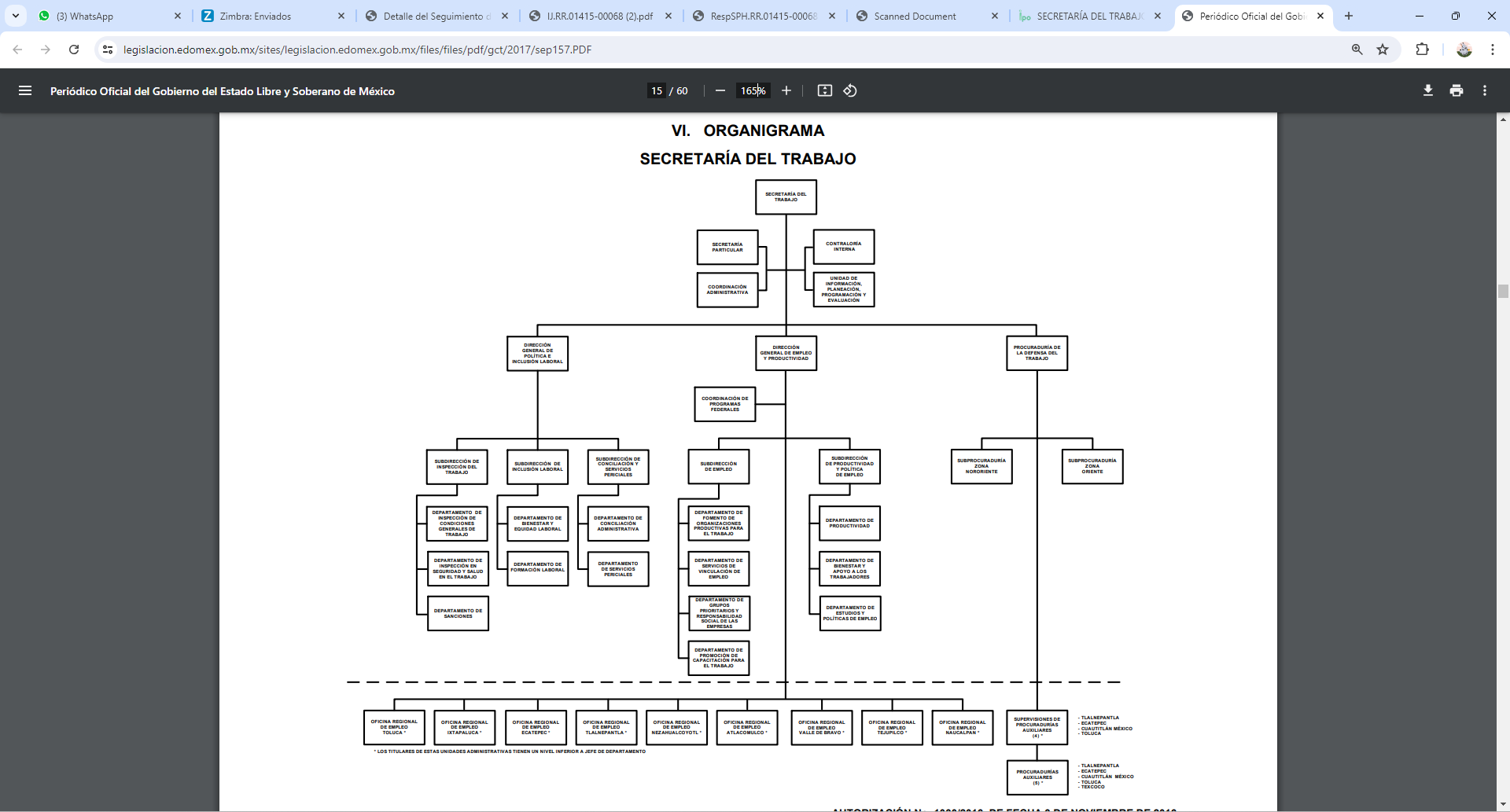
Correlativo a lo anterior, es importante precisar que, de la solicitud de información, así como la respuesta proporcionada a la misma y la información remitida mediante informe justificado, se desprenden diversos documentos, por lo que, con el fin de facilitar el estudio, es necesario realizar un cuadro comparativo, para mejor proveer respecto de lo peticionado y lo entregado, el cual se comprende en los términos siguientes:

| Solicitud de Información | Respuesta | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Producto de una inspección laboral de 2019 a 2024, solicito: | | |
| 1. Listado de empresas sancionadas | El **Subdirector de Inspección del Trabajo**, informó, que se indica a los centros de trabajo por conducto del patrón, apoderado o representante legal, al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, para que **en un plazo de tres días hábiles siguientes**, al que surta efectos la notificación del acuerdo en el que se les informa las acciones que esa autoridad lleva a cabo, **para que manifiesten por escrito si está o no de acuerdo con la publicación de sus datos personales**, contenidos en los expedientes que se conforman derivados de los Procesos Administrativos Sancionadores, tomando en consideración de que **a falta de comunicación expresa del interesado, se entenderá que no existe consentimiento para que se publique dichos datos** y por ende serán protegidos por esa autoridad. Atento a ello no se hace entrega del listado de las empresas sancionadas, para no incurrir en responsabilidad.  Mediante informe justificado insertó captura de pantalla, de un extracto del texto referido en el Auto de Radicación, el cual se advierte a continuación: | **No** |
| 2. Las sanciones que hayan sido determinadas. | Proporcionó el número desagregado por año de las empresas sancionadas, así como los montos impuestos, tal como se observa en la siguiente imagen: | **Sí**  **(actos consentidos)** |

Es así vez que podemos concluir del cuadro anterior, que se tiene por atendido el requerimiento marcado con el numeral **dos (2),** en virtud de que fue consentido por **el Recurrente,** al no formar parte de sus razones o motivos de inconformidad.

Asimismo, referente al punto **uno (1)** de la solicitud de información, correspondiente al **listado de las empresas sancionadas,** el Sujeto Obligado manifestó la imposibilidad de hacer entrega del listado requerido

Hechas las precisiones anteriores y en relación a lo requerido por el particular, primeramente resulta necesario traer a colación el organigrama de la Secretaria del Trabajo, el cual se inserta a continuación:



Por otro lado, resulta importante traer a colación el objetivo y funciones de la **Dirección General de Política e Inclusión Laboral**, así como de la **Subdirección de Inspección del Trabajo**, unidades administrativas que resultan de nuestro más amplio interés, los cuales se citan a continuación:

***OBJETIVO:***

*Generar e implementar políticas para promover el trabajo digno, formal e incluyente, que erradique el trabajo infantil, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones en materia de condiciones generales de trabajo e instaurar el procedimiento administrativo sancionador.*

***FUNCIONES:***

*Prestar el servicio público de conciliación laboral y los servicios periciales y coadyuvar con la autoridad federal del trabajo en seguridad y salud, capacitación, adiestramiento y productividad protegiendo los derechos de los trabajadores.*

*Fomentar en los centros laborales de competencia local el trabajo digno, formal, libre de trabajo infantil e incluyente.*

*Promover y vigilar que los centros de trabajo de competencia local cumplan con las condiciones generales de trabajo, seguridad y salud laboral, contenidas en la Ley Federal del Trabajo y los Reglamentos respectivos.*

*Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las condiciones generales de trabajo o negativa patronal para la práctica de la inspección.*

*Proteger y vigilar de manera especial, a través de inspecciones o por cualquier otro medio, el trabajo de los mayores de 15 años y menores de 16 y, en su caso, expedir las autorizaciones que señala la Ley Federal del Trabajo.*

*Asesorar al sector patronal para cumplir con las normas de trabajo, así como a las y los trabajadores y sindicatos, respecto de sus derechos y obligaciones laborales.*

*Formular recomendaciones a las organizaciones sindicales o cámaras y asociaciones patronales, sobre programas preventivos de accidentes en materia de seguridad, salud y medio ambiente laboral.*

*Atender los asuntos donde la Secretaría del Trabajo sea parte, ante las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales de los ámbitos federal, estatal y municipal.*

*Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la dependencia en la formulación de contratos, convenios y demás actos jurídicos en los que intervenga o sea parte la Secretaría del Trabajo.*

*Coordinar el servicio público de la conciliación laboral en conflictos individuales y colectivos de trabajo, así como los que surjan de las relaciones laborales entre el Estado y las y los servidores públicos.*

*Coordinar los servicios periciales en materias de documentos cuestionados y valuación de bienes muebles e inmuebles.*

*Promover la profesionalización y capacitación de las y los servidores públicos, factores de la producción y de las y los interesados en las materias de condiciones generales de trabajo, seguridad, salud y medio ambiente laboral. Elaborar, revisar y celebrar los contratos, convenios y demás actos jurídicos que determine la o el titular de la Secretaría.*

*Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 204010200*

***SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO***

***OBJETIVO:***

*Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral a través de las inspecciones, en materia de condiciones generales de trabajo y, en su caso, la instauración, substanciación y resolución del procedimiento administrativo sancionador.*

***FUNCIONES:***

*Ordenar la programación de visitas e inspecciones de los centros de trabajo del ámbito de su competencia, para vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y de la normatividad en materia de seguridad y salud laboral.*

*Comisionar a los Inspectores del Trabajo para realizar inspecciones en los centros de trabajo de jurisdicción local.*

*Promover y coordinar la inscripción al programa de Auto-Verificación de los centros de trabajo de competencia local para que den cumplimiento a la normatividad laboral.*

*Coordinar la orientación y asesoría a las y los trabajadores y a las y los patrones, sobre el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, y en auxilio de la autoridad federal del trabajo, en materia de seguridad y salud laboral.*

*Supervisar la asesoría jurídica que requiera la o el titular de la Secretaría y las unidades administrativas en las demandas y litigios en donde sean parte o tengan interés.*

*Vigilar que se realice la denuncia al Ministerio Público cuando derivado de las inspecciones o en la substanciación de procedimientos administrativos, existan elementos o hechos presuntamente constitutivos de delito.*

*Supervisar la elaboración o revisión de los documentos jurídicos de la Secretaría.*

*Coordinar la instauración, substanciación y resolución del procedimiento administrativo sancionador.*

*Vigilar la imposición de las sanciones económicas correspondientes a los centros de trabajo que no cumplan con las condiciones generales de trabajo.*

*Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia*

De los preceptos normativos, podemos advertir que se pronunciaron los Servidores Públicos Habilitados de las unidades administrativas que de acuerdo a sus funciones se encuentra dentro de su competencia para dar respuesta a lo requerido por el particular.

En ese sentido, no pasa desapercibido para este Instituto que la petición realizada por el **Recurrente** al momento de ingresar su solicitud de información y reiterada mediante sus manifestaciones durante la etapa de instrucción, en relación a la posibilidad de que se configure un conflicto de interés ya que, el Sujeto Obligado informó que al no existir consentimiento por parte de las empresas para que se publiquen sus datos personales tendrán que ser protegidos por esa autoridad el listado de empresas, toda vez, que no fue manifestado por escrito su acuerdo con la publicación de sus datos personales, contenidos en los expedientes que se conforman derivados de los Procesos Administrativos Sancionadores.

En este punto es evidente que se presenta una colisión de derechos, puesto que lo que el **Recurrente** solicita es considerado como información confidencial que no será de escrutinio, relacionada con el **listado de las empresas sancionadas** **derivada de una inspección laboral**, toda vez que las empresas no cumplen con las Leyes laborales, así como los derechos de los trabajadores dando como consecuencia una afectación a los trabajadores y a la sociedad en general; siendo el resultado de un conjunto de actuaciones realizadas por la inspección laboral destinadas a demostrar el cumplimiento de las disposiciones legales, sin embargo, en el caso en concreto han sido sancionadas por el incumplimiento de las mismas.

En esos términos, es necesario establecer que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley en la Materia, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el párrafo vigésimo segundo, fracción VIII del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que a la letra señala:

*Artículo 5.*

*[…]*

*VIII.* ***El Estado contará con un organismo autónomo****, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna****, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley****.*

***El organismo autónomo garante previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados****.*

Es así que este Órgano Garante se rige, principalmente, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Sin embargo, también está obligado a sujetarse a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la ley suprema en nuestro país, así como a los tratados internacionales que se hayan firmado en la Materia.

En ese tenor, debe tenerse en cuenta que el artículo sexto de nuestra Carta Magna estipula lo siguiente:

***Artículo 6o.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.* ***El derecho a la información será garantizado por el Estado****.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.*

***Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:***

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

1. ***Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral*** *o sindicato* ***que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito*** *federal, estatal y* ***municipal, es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por , razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.*** *Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*
2. ***La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.***
3. *(…)*

Asimismo, es necesario dejar establecido que el primer y segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

***Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento****. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.*

***Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales****, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición,* ***en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos****, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o* ***para proteger los derechos de terceros.***

De la interpretación de los numerales citados, se tiene que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Por tanto, se puede colegir que la información que posee el Sujeto Obligado respecto del listado de las empresas sancionadas por una inspección laboral, solicitado por el **Recurrente** es pública; sin embargo, en el caso en concreto se debe señalar que el Sujeto Obligado se encuentra impedido en entregar los datos considerados personales de las referidas empresas, al ser datos particulares, por lo que, si bien su clasificación como información confidencial es posible en apego a lo señalado por las Leyes en la Materia, también es necesario ponderar si es mayor el **interés público** de conocer el listado de las empresas sancionadas, atendiendo a los datos personales involucrados, que de ser el caso, pudieran no ser accesible a cualquier interesado, y por lo tanto se evidencia una afectación a los terceros involucrados, mismos que tuvieron una sanción respectiva.

Asimismo, el listado de empresas sancionadas, puede calificarse como información de interés público, entendiéndose ésta como aquella que resulta relevante o beneficiosa para los trabajadores, pues en este caso, en primer término es importante para protección y beneficio de los propios trabajadores de cualquier organismo, ya sea público o privado, toda vez que se encuentran inmersos los derechos laborales de los trabajadores, misma que genera una responsabilidad del cumplimiento a las leyes laborales y de seguridad en el trabajo y por lo tanto, el acto debe ser considerado de escrutinio público, situación que sí es de interés público y general.

Aunado a ello, el hacer pública la información relacionada al listado de las empresas sancionadas derivada de una inspección laboral, referido por el particular, deviene de una decisión, ejecución o ambas, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas y que se impongan de manera imperativa; por lo que, las empresas, si bien, en principio no están obligadas a publicar este tipo de actos, también lo es, que alguno de sus trabajadores pudiera sufrir alguna afectación con las decisiones tomadas en dicho órgano, así como a los derechos de los trabajadores, al incumplir con los parámetros exigibles de la ley laboral, por lo que afecta a los trabajadores y a la sociedad en general, por tanto se volverá información susceptible a transparentarse, dado que su participación trasciende en la determinación tomada en cualquier Empresa.

Ahora bien, este Instituto se encuentra constreñido a actuar en apego a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable y bajo diversos principios, entre ellos los de **legalidad** y **objetividad**, entendiendo éstos como sigue:

**Legalidad.** Obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables.

**Objetividad.** Obligación del Instituto de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales.

Es importante establecer que, para verificar si es posible dar a conocer un dato considerado como confidencial, es necesario la realización de una prueba de interés público, tal como está estipulado en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, con número de registro 2016812, que a la letra dispone lo siguiente:

***DATOS PERSONALES. LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS AL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LAS PARTES EN LAS LISTAS DE LOS ASUNTOS VENTILADOS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO IMPLICA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL NI PRECISA, POR ENDE, DE LA ANUENCIA DE AQUÉLLAS.***

***El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, entre otros aspectos relacionados con el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, que la relativa a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos que fijen las leyes; en tanto que la información en posesión de los sujetos obligados es pública****, y sólo podrá reservarse temporalmente en los casos previstos por la ley, entre los que destacan, la posible afectación del interés público, la seguridad nacional, los derechos del debido proceso o la adecuada conducción de los expedientes judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, así como cuando se ponga en riesgo la vida o la seguridad de una persona.* ***También se establece en dicho precepto constitucional que en la interpretación del derecho mencionado deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 104, 113, 116 y 120 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública procede restringir el acceso a la información en poder de los sujetos obligados, cuando se clasifique como*** *reservada o como* ***confidencial****. Así, puede considerarse reservada mediante la aplicación de la prueba de daño, si éstos demuestran que con su divulgación se actualizaría alguno de los supuestos legales en que se juzga preferible aplazar su acceso.* ***Tratándose de información confidencial****, los sujetos obligados* ***sólo pueden divulgarla o permitir a terceros acceder a ella*** *si cuentan con el consentimiento de los titulares, o bien, cuando* ***mediante la prueba de interés público, que tiene por objeto distinguir qué información sensible de los gobernados puede ser objeto de divulgación, se corrobore la conexión entre la información confidencial y un tema de interés público, y ponderando el nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por su divulgación y el interés de la colectividad****. Por tanto, la publicación regular de las listas de los asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales, en las que se indica el nombre o denominación de las partes, y que tiene como objeto dar a conocer a los interesados que en el expediente de que se trata se emitió una resolución, no implica la divulgación de información confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquéllas, porque no involucra aspectos relacionados con su vida privada, ni datos personales que ameriten un manejo diferenciado al general. Lo anterior, porque ese elemento se utiliza para identificar el promovente en un proceso judicial, lo cual, por sí solo, no afecta su honor en forma negativa ni genera descrédito a su imagen pública, y mientras no se demuestre que puede ocasionarle daño, no es razonable restringir ese empleo por los órganos jurisdiccionales, en observancia a los principios de transparencia y máxima publicidad.[[2]](#footnote-2)*

En ese sentido, para estar en posibilidades de desclasificar información considerada como confidencial, es necesario que se realice una prueba de interés público, en la que se distinga la información sensible de los gobernados que puede ser objeto de divulgación, en el presente caso, el listado de las empresas sancionadas derivado de una inspección laboral, realizado por el Sujeto Obligado referido en la solicitud de información de mérito, y se corrobore la conexión entre la información confidencial y un tema de interés público, y la ponderación del nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por su divulgación y el interés de la colectividad.

Correlativo a lo anterior sirve de sustento lo dispuesto en el artículo 542, fracciones II y III, de la Ley Federal del Trabajo, precepto legal normativo que a su literalidad establece lo siguiente:

***Artículo 542.-******Las y los Inspectores del Trabajo*** *tienen las obligaciones siguientes:*

*I. Identificarse con credencial debidamente autorizada, ante los trabajadores y los patrones;*

***II. Inspeccionar periódicamente las empresas*** *y establecimientos;*

***III. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores o cuando reciban alguna denuncia respecto de violaciones a las normas de trabajo****;*

*IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con intervención de los trabajadores y del patrón, haciendo constar las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo, entregar una copia a las partes que hayan intervenido y turnarla a la autoridad que corresponda; y*

*V. Las demás que les impongan las leyes.*

*La inspección se realizará con especial atención tratándose de personas trabajadoras del hogar, del campo, migrantes, indígenas y afromexicanas, personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, así como personas trabajadoras del hogar menores de dieciocho años.*

Aunado a lo anterior, resulta importante traer a colación lo dispuesto en el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por violaciones a la Legislación Laboral, el cual establece como las autoridades del trabajo deberán practicar las inspecciones en los centros de trabajo, así como el procedimiento que se lleva a cabo para realizar una inspección a un centro de trabajo, tal y como lo establecen los siguientes preceptos jurídicos:

***TÍTULO PRIMERO***

***DE LAS DISPOSICIONES GENERALES***

***CAPÍTULO ÚNICO***

***DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES***

***ARTÍCULO 1.*** *El presente ordenamiento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo, en relación con el procedimiento para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma en los centros de trabajo. Su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias*.

***ARTÍCULO 2.*** *Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:*

*(…)*

***III. Inspección:*** *Acto de la Autoridad del Trabajo competente mediante el cual se realiza la promoción y la vigilancia del cumplimiento a la legislación laboral, o bien se asiste y asesora a los trabajadores y patrones en el cumplimiento de la misma. Su desahogo se realiza de manera presencial en el Centro de Trabajo, a través de los servidores públicos facultados y autorizados para ello, o bien, mediante el uso de las tecnologías de la información, requerimientos documentales y análogos;*

***IV. Inspector del Trabajo:*** *El servidor público designado por la Autoridad del Trabajo para practicar visitas en los Centros de Trabajo;*

*(…)*

***SECCIÓN QUINTA***

***DE LAS INSPECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS***

***ARTÍCULO 27.*** *Las Autoridades del Trabajo deberán practicar en los Centros de Trabajo Inspecciones ordinarias, mismas que deberán efectuarse en días y horas hábiles y serán las siguientes:*

***I. Iniciales:*** *Las que se realizan por primera vez a los Centros de Trabajo, o por ampliación o modificación de éstos;*

***II. Periódicas:*** *Las que se efectúan con intervalos de doce meses, plazo que podrá ampliarse o disminuirse de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan derivados de Inspecciones anteriores, tomando en consideración la rama industrial, la naturaleza de las actividades que realicen, su grado de riesgo, número de trabajadores y ubicación geográfica.*

*La programación de estas Inspecciones se hará por actividad empresarial y rama industrial en forma periódica, estableciendo un sistema aleatorio para determinar anualmente el turno en que deban ser inspeccionados los Centros de Trabajo. La autoridad competente en materia de responsabilidades de los servidores públicos verificará el correcto funcionamiento de dicho sistema, y*

***III. De comprobación****: Las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas emplazadas u ordenadas previamente por las Autoridades del Trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Autoridad del Trabajo podrá habilitar el desahogo de este tipo de visitas en días y horas inhábiles.*

***ARTÍCULO 28.*** *Las autoridades del trabajo podrán ordenar la práctica de Inspecciones extraordinarias en cualquier tiempo, incluso en días y horas inhábiles y procederán en los siguientes casos:*

*I. Tengan conocimiento de que existe un Peligro o Riesgo Inminente o bien, cuando reciban quejas o denuncias por cualquier medio o forma de posibles violaciones a la legislación laboral;*

*II. Se enteren por cualquier conducto de probables incumplimientos a las normas de trabajo;*

*III. Al revisar la documentación presentada para cualquier efecto, se percaten de posibles irregularidades imputables al patrón o de que éste se condujo con falsedad;*

*IV. Tengan conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en los Centros de Trabajo;*

*V. En el desahogo de una Inspección previa o en la presentación de documentos ante la Autoridad del Trabajo, el patrón o sus representantes proporcionen información falsa o se conduzcan con dolo, mala fe o violencia;*

*VI. Se detecten actas de Inspección o documentos que carezcan de los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, o en aquéllas de las que se desprendan elementos para presumir que el Inspector del Trabajo incurrió en conductas irregulares;*

*VII. Se realice la supervisión a que se refiere la Sección Cuarta de este Capítulo;*

*VIII. Se verifique que los Centros de Trabajo hayan suspendido sus labores, con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la autoridad correspondiente, y*

*IX. Se requiera constatar que el escrito de objeciones a la declaración de los patrones previsto en el artículo 121 de la Ley, para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, fue presentado por la mayoría de los trabajadores de la empresa.*

***ARTÍCULO 29.*** *Los Inspectores del Trabajo, para practicar las Inspecciones ordinarias, lo harán previo citatorio que entreguen en los Centros de Trabajo por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se realizarán, en el que se especificará el nombre del patrón, domicilio del Centro de Trabajo, día y hora en que se practicará la diligencia, el tipo de Inspección, el número y fecha de la orden de Inspección correspondiente, acompañando un listado de documentos que deberá exhibir el patrón, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamenten.*

*En caso de que la Autoridad del Trabajo, por alguna circunstancia, no le fuera posible llevar a cabo la visita, se deberá notificar al Centro de Trabajo un nuevo citatorio, dejando sin efectos el anterior.*

*Las Inspecciones extraordinarias serán practicadas por los Inspectores del Trabajo sin que medie citatorio previo, a fin de satisfacer su objetivo primordial de detectar en forma inmediata la situación que prevalece en el Centro de Trabajo inspeccionado.*

*Al inicio de las Inspecciones ordinarias o extraordinarias, el Inspector del Trabajo deberá entregar al patrón o a su representante o a la persona con quien se entienda la diligencia, el original de la orden escrita respectiva, con firma autógrafa del servidor público facultado para ello, así como una guía que contenga los principales derechos y obligaciones del inspeccionado. Dichas órdenes de Inspección deberán precisar el Centro de Trabajo a inspeccionar, su ubicación, el objeto y alcance de la diligencia, su fundamento legal, así como los números telefónicos a los que el patrón podrá comunicarse para constatar los datos de la orden correspondiente*

*.El Inspector del Trabajo deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función. Las credenciales de los Inspectores del Trabajo deberán contener, de manera clara y visible, la siguiente leyenda: “Esta credencial no autoriza a su portador a realizar Inspección alguna, sin la orden correspondiente”.*

***ARTÍCULO 30.*** *Al momento de llevarse a cabo una Inspección, tanto el patrón como sus representantes, están obligados a permitir el acceso del Inspector del Trabajo y, en su caso, de los expertos en la materia habilitados para tal efecto, al Centro de Trabajo y a otorgar todo tipo de facilidades, apoyos y auxilios, incluyendo los de carácter administrativo, para que la Inspección se practique y para el levantamiento del acta respectiva, así como proporcionar la información y documentación que les sea requerida por el Inspector del Trabajo y a que obliga la Ley, sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables en la materia.*

*De toda Inspección se levantará acta circunstanciada, con la intervención del patrón o su representante, así como la de los trabajadores, en presencia de dos testigos propuestos por la parte patronal, o bien, designados por el propio Inspector del Trabajo si aquélla se hubiere negado a proponerlos.*

*En caso de que el patrón o su representante se opongan a la práctica de la Inspección ordenada, el Inspector del Trabajo lo hará constar en el acta correspondiente. La Autoridad del Trabajo, previo acuerdo de su titular, lo hará del conocimiento del Ministerio Público competente para los efectos legales procedentes, independientemente de la sanción administrativa que proceda.*

*Cuando por causas ajenas al patrón no se pueda llevar a cabo la diligencia de Inspección, el Inspector del Trabajo hará constar el hecho y su descripción en un acta de la cual deberá dejar una copia en el Centro de Trabajo y recabar la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, con el objeto de reprogramar la visita, en los términos de los Programas de Inspección correspondientes.*

***ARTÍCULO 31.*** *Si durante la práctica de una Inspección ordinaria se detecta que el Centro de Trabajo emplea quince o menos trabajadores y la empresa en su conjunto no tiene más establecimientos o sucursales que el lugar visitado, el Inspector del Trabajo deberá señalar dicha circunstancia en el acta y desahogar la visita en los términos que establece la Sección Segunda de este Capítulo.*

Es así que, ante una colisión de derechos, el Pleno de este Instituto tiene la facultad de interpretar los ordenamientos aplicables con el propósito de resolver de manera armónica entre los derechos en conflicto, en el presente caso, entre el derecho a la información pública y el derecho a la protección de información susceptible de ser clasificada como confidencial, en concreto la relativa al listado de las empresas sancionadas, requerido por el **Recurrente**. Lo anterior de acuerdo a los artículos 36 fracción de la Ley de Transparencia local; 82 fracciones I y X de la Ley de Protección de Datos estatal; y artículo 9 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Por tanto, es necesario establecer puntualmente los aspectos a considerar, a fin de llevar a buen término el criterio que prevalecerá en el presente estudio, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado como ya ha quedado señalado. En ese orden de ideas, se puntualiza lo siguiente:

* Basándose en su derecho constitucional de acceso a la información**, el Recurrente** solicitó el listado de las empresas sancionadas, así como las sanciones determinadas derivadas de una inspección laboral, y al respecto conocer si existe un conflicto de intereses con motivo de la autorización del mismo.
* El Sujeto Obligado informó mediante respuesta, que se encuentra imposibilitado para hacer entrega del listado de las empresas sancionadas, toda vez, que no existe consentimiento para que se publique los datos personales de las referidas empresas y por ende serán protegidos por esa autoridad, para no incurrir en responsabilidad.
* El Recurrente no concuerda con dicha aseveración debido a que considera que dado que son sujetos que han sido sometidos a un procedimiento administrativo y ha sido comprobado su incumplimiento en las condiciones legales estipuladas en la ley, por tal motivo no puede existir una responsabilidad de la dependencia de proteger sus datos.
* Este Instituto debe velar por la máxima publicidad de la información pública y el derecho del Recurrente para la obtención de la información solicitada.
* Por otra parte, este Instituto también está obligado a la protección de información susceptible de clasificarse como confidencial, en el caso en concreto, el listado de las empresas sancionadas derivado de una inspección laboral.
* Este Instituto está obligado a actuar conforme lo establecen las leyes vigentes aplicables.

Es así que, en concordancia con el artículo 184 de la Ley de Transparencia local, es menester para la resolución del conflicto entre derechos, el aplicar la prueba de interés público basándose en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, se establece lo siguiente:

**IDONEIDAD** (*la legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido*). El Pleno considera que en el presente caso la solicitud del Recurrente se refiere al objeto del listado de las empresas, es decir, requiere conocer el nombre o razón social, no a datos personales de las mismas empresas; con la finalidad de que no ocasione una vulneración, causando posibles daños y perjuicios a las empresas. Por lo que se estima que puede existir un interés público lo que es acorde con las excepciones constitucionales a la protección de información referente a la vida privada y datos personales. Así, en el presente asunto, el derecho de acceso a la información pública se adopta como preferente y este contempla un fin constitucionalmente válido que radica en privilegiar la máxima publicidad conforme a lo dispuesto en el artículo 6º constitucional.

**NECESIDAD** (*la falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información para satisfacer el interés público*). En esta etapa es necesario analizar si existe alguna medida alternativa que también pueda resultar idónea que afecten en menor medida los derechos fundamentales en colisión. En el presente caso, no se considera que exista ninguna otra medida más conveniente que el test de proporcionalidad que se está aplicando, en razón de que los dos derechos en conflicto están tutelados por leyes generales y estatales que constriñen a este Instituto a proteger. Por este motivo, se estima que éste es el único medio al alcance de este Órgano Garante para publicar el listado de las empresas citados anteriormente; lo que permitirá que se lleve a cabo un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía a las actuaciones de la autoridad encargada de sancionar a las empresas que incumplen con las leyes laborales, así como en la seguridad laboral de los trabajadores, lo que se traduce en ocultar a la ciudadanía el nombre de las empresas que incumplen con las leyes laborales.

**PROPORCIONALIDAD** (*el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población*). En el caso en concreto, como ya quedo señalado anteriormente, se considera que la solicitud de información es concerniente al listado de las empresas sancionadas, lo cual es de interés público por la importancia que tiene para la sociedad el conocer cada una de las empresas que no otorgan una seguridad laboral a sus trabajadores y que de manera han violentado las leyes laborales con la finalidad de que no se causen daños o perjuicios a las empresas, por lo que la afectación a los terceros sería menor a la vulneración de toda una comunidad, puesto que únicamente se proporcionaría el nombre de las empresas sancionadas, pero se protegerían los demás datos personales que les son inherentes.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que no existen derechos absolutos y que estos encuentran sus limitantes y restricciones cuando se presentan otros derechos, fines o bienes constitucionales que también deben ser tutelados, para mayor abundamiento resulta aplicable la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con número de Registro 2003269, que a la letra señala lo siguiente:

***DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS.***

***La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas****, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. En estas condiciones, la delimitación de ese núcleo intangible debe ser a partir de la subsistencia del derecho a la libertad y la posibilidad de ejercerlo; esto es, de un efectivo disfrute, de forma tal que los límites internos son aquellos que emergen al momento de definir los alcances del objeto concretamente protegido por cada derecho fundamental, es decir, sirven para definir el contenido del derecho, intrínseco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado, por lo cual cualquier supuesto que desborde esas fronteras es otra realidad carente de protección. Por otro lado,* ***es posible delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo****.[[3]](#footnote-3)*

De tal forma que no es posible establecer que el derecho a la protección de los datos personales sea absoluto y en el caso en concreto, el perteneciente al listado de las empresas sancionadas referido en la solicitud de información. Así, se debe recordar que el derecho de acceso a la información es considerado como un derecho llave, que abre la posibilidad de acceder a otros derechos. Lo anterior quedó de manifiesto puesto que el máximo Tribunal de nuestro país ha dispuesto que el derecho de acceso a la información tiene una doble naturaleza, pues es un derecho tanto individual como social, según la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte con número de registro 169574, que a la letra establece lo siguiente:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.***

***El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos****. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado,* ***el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración****. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[[4]](#footnote-4)*

Por lo anterior, resulta evidente que el permitir el acceso al listado de las empresas sancionadas referido en la solicitud de información, otorga la posibilidad de que se ejerza un control institucional a las actuaciones de las autoridades en el sentido de que se puede verificar la correcta aplicación de las leyes laborales, traduciéndose en un beneficio de terceros que la autoridad ha actuado en apego a la normatividad y no se causa ningún tipo de daño o perjuicio a la sociedad la publicidad de las empresas sancionadas mediante las inspecciones realizadas por autoridades laborales llevadas a cabo por el Sujeto Obligado para no incurrir en responsabilidad.

Por lo anterior, es que se colige que el hacer entrega del listado de las empresas sancionadas, favorece a la rendición de cuentas del Sujeto Obligado, además de que se evita que continúen las arbitrariedades en contra de los trabajadores, sufriendo violaciones en sus derechos laborales, por lo que el hacer público las empresas sancionadas, corresponde evidentemente a un tema de interés público.

Por tanto, después de realizar la ponderación entre los derechos en colisión, el Pleno de este Instituto considera que, en este caso en particular, es preferible que el listado de empresas sanciones derivado de una inspección laboral, realizado por el Sujeto Obligado se entregue, pues esto implica un interés público mayor para la sociedad con respecto al menoscabo del derecho de protección de datos personales de las empresas, puesto que únicamente se dejara visible la información correspondiente al nombre de las empresas que han sido sancionadas.

En consecuencia, este Instituto estima que los motivos de inconformidad del Recurrente son fundados, siendo procedente ordenar la entrega del listado de empresas sanciones derivado de una inspección laboral, referida en la solicitud de información de mérito.

1. ***De la Versión Pública***

De la naturaleza de la información se desprende que para el caso de que la documentación a entregar contenga datos personales susceptibles clasificar como confidenciales o reservados, por lo que es responsabilidad del Sujeto Obligado vigilar su cumplimiento mediante la emisión de versiones públicas.

Para tales efectos se deberá observar lo dispuesto por los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132 fracciones II y III, y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

***Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***IX. Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*[…]*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*[…]*

***Artículo 143.*** *Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública. [Sic]*

Igualmente, los *Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas*, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día quince de abril de dos mil dieciséis, tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al Sujeto Obligado a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen, deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Finalmente, y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundados los motivos de inconformidad vertidos por **el** **Recurrente**, por ello con fundamento en el artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información **00068/ST/IP/2024,** que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado.

**S E R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **Sujeto Obligado**, a la solicitud de información número **00068/ST/IP/2024,** por resultar parcialmente fundados los motivos de inconformidad que arguye el Recurrente, en términos del Considerando **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado** haga entrega al **Recurrente,** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en términos del Considerando **CUARTO** de la presente resolución, en versión pública de ser procedente, de lo siguiente:

1. Listado de las empresas sancionadas derivado de una inspección laboral del periodo comprendido del año dos mil diecinueve al veintiuno de febrero del dos mil veinticuatro.

*Como sustento de la versión pública, se deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia correspondiente, en términos del artículo 49, fracción VIII y 132 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo y se ponga a disposición del* ***Recurrente****.*

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. NOTIFÍQUESE** al **Recurrente** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** y hágase de su conocimiento que en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 196, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA **TRIGÉSIMA SÉPTIMA** SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL **DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO**, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ-------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/BPAC

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Tesis: I.1º.A.E.229 A (10ª), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 54, t. III, mayo de 2018, pág. 2487. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tesis: I.4º.A.17 K (10ª), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIX, t. 3, abril de 2013, pág. 2110. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tesis: P./J. 54/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, junio de 2008, pág. 743. [↑](#footnote-ref-4)